

De la vida poca a la vida loca: el problema de la violencia juvenil en Centroamérica

Mauricio Gaborit

La tasa de homicidios por cien mil habitantes, que es el índice reconocido internacionalmente para medir la violencia¹, en Centroamérica supera al promedio del continente americano y sobrepasa con mucho el promedio mundial.² Las últimas estadísticas provenientes de instancias oficiales y reportadas por la prensa centroamericana señalan que tres países centroamericanos (Honduras, El Salvador y Guatemala) tienen índices de violencia que, si bien han colocado a estos tres países en orden distinto en los últimos tres años son, con todo, bastante elevados.

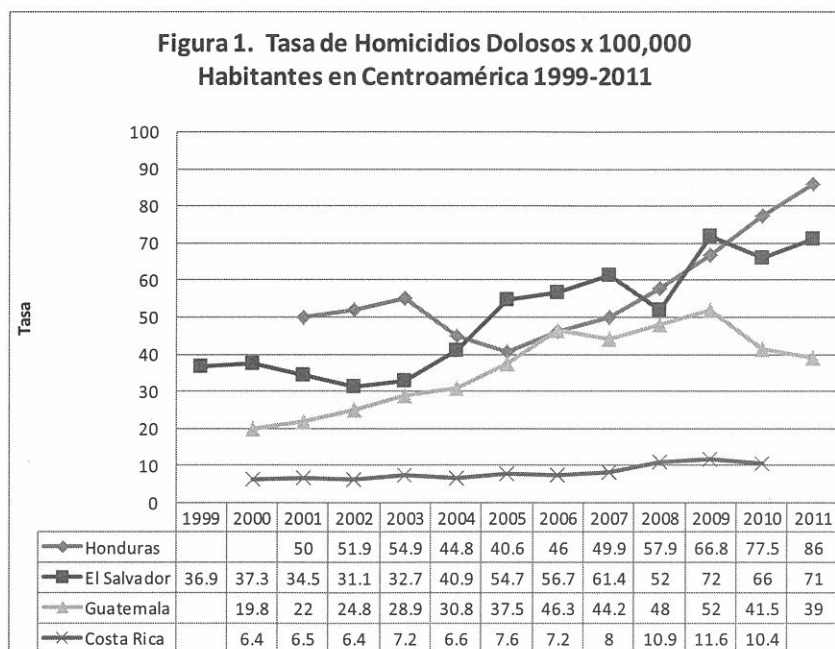
Según el Observatorio de la Violencia de Honduras, la tasa de homicidios en 2011 fue de 86 por cada cien mil habitantes.

¹ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2002). *Indicadores sobre violencia en El Salvador*. San Salvador: autor. Conviene señalar que según la fuente puede haber diferencias grandes en las tasas computadas debido a los tipos de homicidios incluidos y las formas de registro de las fuentes.

² El promedio en el mundo en los últimos 10 años es de 8.8 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo cual ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a recomendar intervención social urgente cuando se sobrepasan estos niveles (Ver: World Health Organization . World Report on Violence and Health, Ginebra: Suiza, 2002). Jorge Sapoznikov de la División de Estado y Sociedad Civil (Región 2) del BID en su ensayo Seguridad Ciudadana Prevención de la Violencia en Centroamérica escribe: "En algunos países tales como El Salvador, Guatemala y Honduras, las tasas de homicidios por 100,000 habitantes ha pasado de rangos de 20 a 35 homicidios, en la década de los 70, a rangos entre 45 y 140 homicidios en la década de los 90. Las ciudades más afectadas han sido las de mayor crecimiento económico puesto que atraen flujos migratorios" (http://www.femica.org/archivos/dis_sapoznikov.thm)

En 2010 los Departamentos que reportaron mayores tasas de homicidios por cien mil habitantes fueron Atlántida (131.8) y Cortés (112.8), del cual San Pedro Sula es la capital, mientras que en el Departamento de Francisco Morazán la tasa fue de 83.2. En el año 1996 la tasa era menos de la mitad, 34.44 por cada cien mil habitantes para todo el país. Sólo en la ciudad de San Pedro Sula, la ciudad industrial del país, en 2011 la tasa de homicidios dolosos fue de 159 por cien mil habitantes, haciéndola la ciudad más violenta del mundo, superando a Ciudad Juárez, México, que ese año reportó 148 homicidios dolosos. No se aleja demasiado El Salvador que en 2011 tuvo una tasa de 71 por cien mil habitantes y Guatemala que fue de 39³. La Figura 1, que se presenta a continuación, da cuenta de los niveles alarmantes de la violencia medida por los homicidios dolosos en la región Centroamericana. Cabe destacar que en El Salvador a partir de 2003, año en que se implementa la primera Ley Mano Dura, el número de homicidios aumenta dramáticamente y ha continuado con esa tendencia, como se puede apreciar en la Figura 1 (ver la tercera línea, de abajo para arriba). En efecto, en El Salvador el año 2003 constituye el punto de inflexión en el aumento de los homicidios dolosos. La salida del ejército a las calles para detener esa espiral de violencia, no ha tenido ningún impacto significativo; todavía mueren asesinadas unas 14 personas diariamente. Aunque en El Salvador, la Ley Mano Dura — declarada inconstitucional después del período en que expiraba— y la que le sucedió, Plan Súper Mano Dura, resultaron totalmente ineficaces en contrarrestar la violencia en la que participaba un número grande de jóvenes. Tanto estos planes de mano dura como el empleo del ejército en tareas de seguridad interna han estado rodeados de fuertes polémicas respecto a su constitucionalidad.

³ En 2003 el Instituto de Medicina Legal de El Salvador registró 2388 personas asesinadas lo que da una tasa de 39.8 por 100,000 habitantes. La Policía Nacional de Guatemala registró 4,244 homicidios en 2003, que daría una tasa de aproximadamente 34 muertes violentas por 100,000 habitantes. De los países latinoamericanos, El Salvador encabeza la lista de homicidios durante el quinquenio 1999-2002, según el informe “La Violencia Urbana en América Latina”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Este es el panorama general de violencia que se está viviendo en Centroamérica actualmente. Los círculos de violencia en los que algunos jóvenes se encuentran son diversos y tienen distintos escenarios. Los estudios y las estadísticas de la violencia en Centroamérica constatan una misma situación: la vorágine de violencia es tal que los jóvenes igualmente son protagonistas como víctimas. Muchos de los que mueren son jóvenes a mano de otros jóvenes y, en medio se encuentran transeúntes, niños y niñas, y otras personas inocentes.⁴ Cualquier lectura rápida de los princi-

⁴ De las 201 defunciones por homicidios cometidos por maras en El Salvador en 2000 y conocidos por el Instituto de Medicina Legal, en aproximadamente un 67% (134 muertes) las edades de las víctimas oscilan entre 5 y 20 años. De los 2696 homicidios cometidos en El Salvador en 2000 según datos de Medicina Legal 9.3% fueron en contra de menores de edad, principalmente entre los 15-17 años (Fuente: *Defunciones por homicidios y suicidios en El Salvador, año 2000*. Instituto de Medicina Legal, Corte Suprema de Justicia). Según datos de la Policía Nacional Civil de El Salvador, 1000 muertes violentas ocurrieron entre pandilleros en el año 2004. El Observatorio Centroamericano de la Violencia reporta que en 2008 en El Salvador 59.4% de todos los homi-

pales rotativos del área centroamericana y una revista de los tele-diarios –por otro lado cada vez más amarillistas– hacen constatar el hecho. He aquí, por ejemplo, uno de los titulares más recientes en la prensa salvadoreña: “Las maras causan luto en Honduras. Dos supuestos pandilleros convirtieron una zapatería artesanal en una carnicería, al acribillar a 20 jóvenes obreros (El Diario de Hoy, 9 Septiembre 2010). En este caso las víctimas son dos jóvenes de 17 a 35 años. Similares titulares se pueden ver todos los días en la prensa escrita de Honduras y Guatemala⁵. Igualmente, los que sufren las consecuencias de la violencia estudiantil son mayoritariamente otros jóvenes que pertenecen a institutos o colegios percibidos y señalados como rivales. En este escrito me referiré con exclusividad a la violencia de maras. La violencia estudiantil como lo señala un reciente estudio de FLACSO⁶ tiene características suficientemente distintas que merece un tratamiento separado. La violencia estudiantil obedece a una dinámica, tiempo, actores, lugares, formas, territorialidad y estructura organizativa diferentes a la asociada a las maras.

cidios fueron en contra de jóvenes entre 0-30 años de edad. Igualmente, en Honduras la mayoría de las víctimas de homicidios son jóvenes o personas en su plena actividad productiva laboral y social. En Honduras, la mayoría de las muertes violentas ocurren entre personas de 15 a 29 años de edad. Según datos del Observatorio de la Violencia (Enero-Diciembre 2008, pg.3) los homicidios en contra de personas de esas edades constituyeron el 45% de todos los homicidios en 2008. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras en 2001 el grupo etario entre los 20 y 34 años fue el que experimentó más muertes violentas en el país. Ver también el informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras en el año 2002 titulado “Muertes Violentas de Jóvenes en Honduras: Una Realidad que Exige Respuestas”.

⁵ En su edición del 10 de septiembre 2010 el diario “La Prensa” de Honduras tiene una nota que titula: “Matanza en Atlántida. Asesinan a madre y sus tres hijos en La Masica”. En este caso, las víctimas son tres jóvenes de 18, 19 y 23 años. Los titulares en los distintos rotativos de Centroamérica sobre hechos de violencia conservan una similitud inquietante: las víctimas son jóvenes, con frecuencia los hechos son también jóvenes y se ha utilizado un arma de fuego para cometer el crimen.

⁶ Savenije, W. (2004). Violencia Estudiantil. FLACSO-El Salvador. Ponencia presentada el 12 de noviembre 2004 en el Seminario Permanente sobre Violencia del Programa Hacia una Sociedad sin Violencia auspiciado por el PNUD, San Salvador.

Uno de los problemas sociales que afecta a las sociedades centroamericanas que tiene orígenes complejos y estructurales y consecuencias graves que se instalan en la vida cotidiana de muchas comunidades es el problema de las maras o pandillas y más recientemente el de las barras estudiantiles. El impacto de la problemática de la violencia de maras sobre la seguridad ciudadana es tan grande que ha llevado a un par de gobiernos a aprobar leyes controversiales denominadas genéricamente como “mano dura”, alguna de las cuales ha sido fallada como inconstitucional⁷. Dicha problemática es aguda no sólo en El Salvador sino en otros países centroamericanos como el número grande de jóvenes que las integran nos lo señala: conservadoramente alrededor de 61 mil pandilleros en todo Centroamérica a finales de 2010 (31 mil en Honduras, 14 mil en Guatemala y más de 16 mil en El Salvador⁸). Un reciente estudio llevado a cabo en Guatemala, Honduras y El Salvador y editado por la UCA⁹ sobre las comunidades donde actúan las pandillas da una explicación a la persistente y problemática existencia de las mismas señalando correlaciones de fuerzas que quedan expresadas en dos dinámicas sociales: la exclusión

⁷ La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en abril de 2004 por un fallo unánime declaró inconstitucional en su totalidad la Ley Antimaras de 2003 aprobada por el legislativo salvadoreño a petición del gobierno de Francisco Flores Pérez. Dicha ley fue promulgada por Decreto No. 158 del 9 de octubre de 2003 con carácter temporal para enfrentar el problema de las actividades ilegales cometidas por jóvenes y adolescentes pertenecientes a maras, pandillas y otros grupos o asociaciones ilícitas.

⁸ Algunas fuentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador elevan la cantidad de miembros de las distintas maras que operan en el país. Desde junio 2003 hasta agosto 2004 la Policía Nacional Civil registró la detención de más de 18,000 jóvenes supuestamente asociados a distintas maras (El Diario de Hoy, 13 de agosto, 2004). Públicamente se discuten cifras que rondan alrededor de 234,000 pandilleros que vivirían en El Salvador, Guatemala y Honduras (La Tribuna, Tegucigalpa, edición del 18 de noviembre 2004, pg.6). Autoridades policiales estiman que sólo en Honduras habría alrededor de 500 grupos de pandillas que integrarían entre 35,000 y 100,000 miembros en total (El Diario de Hoy, 17 de agosto 2004). Es difícil tener una idea clara sobre la calidad de los datos sobre el número de miembros de las pandillas, aunque los que se barajan indican claramente la gravedad social del problema. (Ver también el Informe Anual 2003, 2007 y 2009 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras ante el Congreso Nacional).

⁹ ERIC, IDESO, IDIES, IUDOP (2004). Maras y pandillas en Centroamérica. Pandillas y capital social. San Salvador: UCA Editores. Ver también: ERIC, IDESO, IDIES, IUDOP (2001). Maras y pandillas en Centroamérica. Managua: UCA Publicaciones.

social y el capital social. Ofrece una radiografía del problema de las maras y pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La primera correlación de fuerza, la de la exclusión social, reconoce el impacto que las macroestructuras sociales tienen en crear condiciones que terminan marginando a muchos jóvenes de la sociedad en general y que, paralelamente, favorecen la integración de algunos de ellos a las maras. La marginación en la que viven muchos jóvenes que son miembros actuales o futuros de maras es profunda. No sólo es económica, sino que incluye la desvinculación del ideario que sustenta una visión de sociedad compartida y de los contratos sociales implícitos entre los distintos grupos que se relacionan al interior de esa sociedad. El tatuaje, la creación de un lenguaje propio con el cual construyen su mundo al igual que la otra sociedad construye el suyo con su lenguaje, las señales de identificación, las normas al interior de la mara, todo ello es un rechazo a la sociedad. Se rechaza la sociedad que los ha expulsado. Es un rechazo activo y muchas veces violento de los valores que sustentan una sociedad que busca aumentar los privilegios de los pocos descuidando el bienestar de los muchos. Los jóvenes se tatúan el cuerpo no sólo para indicar la adhesión incondicional y perenne a su grupo, sino también para marcar y reclamar a la sociedad esa exclusión¹⁰. En algunos jóvenes los

¹⁰ Algunos antropólogos sociales señalan que, en general, los tatuajes representan una de las múltiples formas de embellecimiento del cuerpo y que es percibido por los que los poseen como un ejercicio individual sobre su cuerpo (Ver: Puelles, V. M., 1998, *Los tatuajes*. Valencia: Editorial La Máscara; y Borel, F., 1992. *Le vêtement incarné*. Mesnil-sur-l'Estrée: Éditions Calmann-Levy; y Demello, M., 2000, *Bodies of inscription: a cultural history of the modern tattoo community*, Duke University Press). El tatuaje es una forma de autonomía sobre la anatomía y en sentido psicosocial es una representación externa del yo. En el caso de las tatuajes que usan los pertenecientes a maras es interesante notar que si bien el elemento de individualización está presente, algunas características de los tatuajes son idénticas, ya que una de sus funciones importantes es publicar la pertenencia a un grupo. ¿Individualización? La importancia del tatuaje también habría que buscarse como contraposición a las cosas transitorias de la vida, incluyendo la propia identidad, pues imprimen cierta permanencia en medio de lo efímero. En contraposición a la sociedad excluyente –que es además una sociedad de consumo y de lo descartable– el tatuaje de los mareros imprime una marca duradera y una señal no descartable al ser una inscripción corporal. (Sobre algunas de estas consideraciones, ver Krischke-Leitao, D., 2004, *Mudanças de significado da tatuagem contem-*

tatuajes cubren buena parte de sus cuerpos, incluyendo el rostro. Encaran así de manera hostil a aquella sociedad que los ha expulsado. Su rostro se convierte en el espejo en el que la sociedad ve reflejado el suyo. En general, esta vida es denominada por los jóvenes como la vida loca. Pero aun el uso del tatuaje ha ido evolucionando a medida que las maras se adaptan a las acciones policiales. Todo parece indicar que el uso del tatuaje está cayendo en desuso, lo cual no significa que lo que antes eso representaba haya desaparecido. Sencillamente su aparente desuso se debe a una estrategia de adaptación a medida que los grupos pandilleros se van acercando y se confunden con el crimen organizado.

Pero como lo señalan los estudios que se han hecho con cuidado, es demasiado simplista pensar que el fenómeno de las maras responde a una sola causa. En realidad, confluyen muchos otros factores. Entre ellos podemos identificar: la privación material de muchas familias y su efecto acumulativo, el hacinamiento, la ausencia de espacios recreativos y el deterioro físico del hábitat comunal, la carencia de recursos sociales, la poca y pobre relación que algunos padres tienen con sus hijos e hijas, la exclusión del sistema de educación formal, la exclusión del mercado laboral, y un largo etc¹¹. Todos estos son factores de riesgo. Cuantos más de estos existan en la vida de los y las jóvenes mayor será la probabilidad que se involucren en las maras.

Conviene recalcar que para entender este fenómeno de la violencia juvenil hay que desvincularse de explicaciones psicologizantes y personalistas que con demasiada frecuencia e igualmente inexactas, sobresimplifican el fenómeno colocándolo en el ámbito de la patología individual. Hay que buscar las coordenadas, más bien, en esos niveles intermedios donde tienen impacto los macrofenómenos. En otras palabras, sin desconocer que en algunos casos —muy limitados, por cierto— el ámbito privado puede ilustrar el fenómeno de la violencia de las maras y barras aplicada a una persona en particular, se necesita concentrarse en cómo

porânea. *Cadernos IHU Idéias*, 16, pg 1-12, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo RS, Brasil.

¹¹ Cf. Santacruz Giralt, M. L., Concha-Eastman, A. (2001). *Barrio adentro. La solidaridad violenta de las pandillas*. San Salvador: Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP). Ver también: ERIC, IDESO, IDIES, IUDOP (2001). *Maras y pandillas en Centroamérica*. Managua: UCA Publicaciones.

los configurantes sociales crean escenarios de acción donde los grupos sociales se desenvuelven en dinámicas donde se evidencian los efectos de los factores de riesgo y protección. El estudio de estos factores y cómo interactúan de manera dinámica pueden dar algunas pistas para responder a la inquietante pregunta de por qué algunos jóvenes en igualdad de condiciones se extraen de la vorágine de la violencia y la pertenencia a las maras, mientras que otros encuentran ahí precisamente donde van configurando su identidad personal y colectiva.

Así, los conceptos que hasta ahora nos han ayudado a entender la cultura juvenil: el grupo de pares, la socialización, la conformación de las identidades grupales, la progresiva disminución de la influencia de la familia, la marginación, las drogas y la profesionalización —en este caso, la del delito—, nos pueden igualmente ayudar a describir y explicar el fenómeno de la violencia juvenil. De esta manera, desde esta óptica podemos observar los efectos de la fragmentación social, de la socialización que se da en la calle, de los códigos de la calle y la débil eficacia colectiva cuando las maras sobre todo —pero también las barras estudiantiles— han ocupado aquellos espacios que ha abandonado la sociedad normativa. Y en consecuencia, constatamos la bancarrota de un sistema elitista, que ha desatendido por décadas las problemáticas que afectan a las juventudes, produciendo unos altos índices de violencia que terminan destruyendo no sólo las oportunidades que dibujan quizá demasiado caprichosamente el futuro de los jóvenes, sino la tésitura misma de la convivencia en los barrios, es decir, las relaciones en aquellos lugares donde se materializan los valores que realmente sustentan la sociedad que hemos construido. No la sociedad que, ingenuamente podemos decir que hemos construido, o la que en un afán de mantener una cosmovisión coherente, creemos que existe porque la vive una pequeña minoría, sino la que, efectivamente, dibuja la realidad.

El segundo conglomerado de fuerzas, el de capital social, hace referencia a las *microestructuras* sociales que aparecen al interior de la vida de las comunidades y en las relaciones interpersonales que allí se dan. Allí se encuentran las redes solidarias que promueven la participación y proveen el apoyo psicosocial tan necesario para personas y comunidades que enfrentan dificultades, la organización local que multiplica el impacto de las acciones personales y las re-significa; y los lugares donde lo religioso busca

su expresión organizativa y material. Este segundo conglomerado abarca, pues, en definitiva, el mundo de los significados objetivados de los que nos hablan Berger y Luckmann¹² y los lugares y espacios donde las teorías implícitas que las personas tienen acerca de cómo funciona el mundo y ellos mismos se traducen en concreciones explícitas.

En cuanto a este segundo conglomerado de fuerzas, la aparición de maras en las comunidades está correlacionada con dos orientaciones importantes de las personas en ellas. En primer lugar está la confianza que las personas sienten respecto a otras en su misma comunidad. Esta orientación está directamente relacionada con el concepto mismo de comunidad. En la medida que las personas confíen en los demás se abren espacios importantes de autogestión, compromiso y de participación comunitaria. Parece ser que cuando existe confianza entre los miembros de la comunidad, por un lado la acción individual queda rescatada de ese sentimiento de futilidad que hace que se perciba como inevitable e intransformable un problema comunitario y, por otro lado, se busquen mecanismos que empoderen o fortalezcan las mismas estructuras organizativas comunitarias. Así, la acción individual no es percibida como aislada sino que abona la consecución de metas comunes donde se pueden identificar claramente actividades que aborden el tema de la violencia y desintegración social que acompaña la presencia de maras en las comunidades. La participación en acciones conjuntas y consensuadas -y para ello se necesita la confianza mutua- es el elemento fundamental que permite que todas las demás puedan alcanzarse, desarrollarse, ampliarse o profundizarse. La participación se refiere a la acción desarrollada por los miembros de la comunidad en función de objetivos generados a partir de necesidades sentidas y de acuerdo con estrategias colectivamente definidas, fundamentadas en la solidaridad y en el apoyo social. Tal acción va acompañada del surgimiento de liderazgos comunitarios.

En segundo lugar, la autogestión en las comunidades es esencial para incidir efectivamente en los efectos de la violencia generada por las acciones de las maras. La autogestión incluye autoeficiencia en la organización comunitaria y, en la medida en

¹² Berger, P. L., y Luckmann, T. (1968). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.

que las acciones comunitarias producen efectos deseados o contribuyen a la solución de problemas comunitarios, fomenta la confianza en sí mismos de los miembros de la comunidad y el sentimiento de seguridad. El compromiso, por su lado, hace resaltar el sentimiento ético de apego y obligación con la comunidad, que lleva a involucrarse en acciones colectivas que puedan producir beneficios para todos¹³. En definitiva, parece claro que la confianza interpersonal es un factor protector ya que abre espacios de acción directamente ligados a abordar los problemas suscitados en las comunidades por la presencia de maras, y además permite discutir ampliamente los problemas y así tener una mejor comprensión de los mismos. Cuando existe la desconfianza interpersonal, el problema queda mal dimensionado puesto que las causas identificadas del mismo son producto del prejuicio, el rumor y el miedo; en definitiva, producto de la ignorancia. Como señala Cruz, "las pandillas subsisten, por tanto, en aquellos entornos comunitarios marcados por el recelo y la desconfianza entre las personas, en donde es difícil que los ciudadanos sientan cierto nivel de seguridad de que las acciones de los demás no estarán orientadas a afectarlos negativamente o a hacerles daño" (pg. 295)¹⁴.

En contraposición a esta dinámica que abre espacios sanos de interacción existen algunos espacios *perversos* que por su misma naturaleza permiten, auspician y fomentan la presencia de maras en las comunidades. Estos espacios perversos contribuyen a la desorganización social de las comunidades por las acciones directamente vinculadas a su actividad como por efectos secundarios que propician distintas formas de violencia. Algunos de estos espacios perversos están, de una u otra manera, unidos al consumo, trasiego y venta de drogas, incluyendo el alcohol. Así, por ejemplo, la presencia de bares y cantinas propicia el desmejoramiento de la precaria base económica para la subsistencia de las personas en las comunidades, y está asociada a grescas, pendencias y otros actos violentos que en algunas ocasiones se extienden más allá del tiempo y lugar del consumo. A la ya pobre calidad de vida, incluyendo un medio ambiente físico deteriorado,

¹³ Cf. Montero, M. (2003). *Teoría y práctica de la psicología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad*. Buenos Aires: Paidós.

¹⁴ Cruz, J. M. (2004). Pandillas y capital social en Centroamérica. En ERIC, IDESO, IDIES, IUDOP. *Maras y Pandillas en Centroamérica. Pandillas y Capital Social* (pgs. 227-332). San Salvador: UCA Editores.

los vecinos tienen ahora que agregar condiciones que favorecen la presencia y acción de las pandillas. Las denuncias suelen ser pocas o inexistentes por el miedo a las represalias, propiciando esto, a su vez, un aumento en la desconfianza mutua y un sentimiento generalizado de malestar.

Está, por otro lado, el negocio de las drogas. La estructura misma de las maras o aún de las barras estudiantiles hace difícil que éstas se dediquen al negocio de las drogas a gran escala –no así a la extorsión– aunque esto, aparentemente, está cambiando rápidamente. En general, la *narcoactividad* produce tres consecuencias negativas importantes en la vida de las comunidades. En primer lugar genera espacios físicos de hechos delictivos y donde se saldan cuentas por negocios venidos a menos que con frecuencia terminan en muertos y heridos, todo lo cual consolida esa desconfianza interpersonal y los efectos negativos asociados a ella. Ante estas situaciones las personas buscan no involucrarse y esta desconfianza les lleva a recluirse en la poca seguridad que les brindan sus hogares. En segundo lugar, propicia la presencia de personas ajenas a la comunidad y que no tienen interés alguno en el bienestar de la misma. Todo lo contrario, éstas se benefician en la medida que la comunidad permanezca desintegrada. Estas personas pueden ser consumidoras de distintas drogas o personas que las comercializan y/o que se pueden disputar un ilegal pero lucrativo mercado. La presencia de terceros suele, igualmente, alentar la desconfianza hacia los mismos vecinos ya que no se sabe con certeza la relación que guardarían entre ellos. En tercer lugar, la narcoactividad atrae formas de actuar represivas de parte de la policía y hace que la comunidad sea percibida como un problema social, donde hay pocos espacios sociales “redimibles” y se estigmatice a los jóvenes. Las acciones policiales represivas aunque puedan ser bienvenidas por algunos pobladores, con frecuencia hacen resaltar su ineficacia a largo plazo en atacar el problema de la venta y uso de drogas, y termina aumentando la desconfianza que se tiene a instituciones de fuera de la comunidad. Estas tres consecuencias favorecen la presencia de maras ya sea que estén asociadas a actos delictivos o no.

En la medida en que las comunidades sean débiles organizativamente y pobres en la variedad de actividades y espacios sanos en los cuales puedan participar activamente sus habitantes, la presencia de las maras en sus calles y pasajes es más proba-

ble. En otras palabras, la presencia de maras está asociada al bajo capital social que puedan tener las comunidades. Una ventaja grande que ofrece la perspectiva del capital social para entender el fenómeno de las maras en las comunidades centroamericanas, y en especial en El Salvador, es que se logran identificar recursos importantes para contrarrestar las acciones negativas de las pandillas. Esto posibilita reconocer dinámicas al interior de las comunidades que permiten su fortalecimiento. Esta perspectiva además logra identificar el impacto que los factores microsociales tienen en la socialización y en la construcción de la identidad de los jóvenes centroamericanos y la percepción y actitud que desarrollan respecto a la violencia y a la pertenencia de pandillas. Al señalar factores de riesgo, logran identificar, igualmente factores que son susceptibles de prevención. Al respecto, conviene decir algo sobre los componentes del fortalecimiento comunitario desde el punto de vista psicosocial. Se podrían identificar tres tipos de componentes en los procesos de fortalecimiento de la comunidad: los *intrapersonales*, los *interactivos* y los *comportamentales*.¹⁵ Conocer cómo actúan los tres —altamente interrelacionados— puede ser útil a la hora de entender mejor cómo el fortalecimiento de las comunidades podría estar asociado a la baja presencia de maras en su medio. Este conocimiento podría orientar estrategias de intervención comunitarias tendientes a reducir la presencia de maras en distintas comunidades, o al menos en paliar sus efectos nocivos.¹⁶

Los componentes intrapersonales se refieren a todas aquellas habilidades y formas de pensar que tiene la persona sobre su propia capacidad de influir en el curso de los eventos significativos de su vida e igualmente incorpora las creencias que esa persona

¹⁵ Ver: Zimmerman, M. A., Israel, B., A., Schultz, A., y Checkoway, B. (1992). Further explorations in empowerment theory: An empirical analysis of psychological empowerment. *Journal of Community Psychology*, 20 (6), 707-727.

¹⁶ Cf. Prilleltensky, I. (1994). Empowerment in mainstream psychology: Legitimacy, obstacles, and possibilities. *Canadian Psychology*, 33, 348-374. Ver también: Montero, M. (2003). *Teoría y práctica de la psicología comunitaria. La tensión entre comunidad y sociedad*. Buenos Aires: Paidós, y Montero, M (1998). La comunidad como objetivo y sujeto de acción social. En A. Martín González (ed.), *Psicología comunitaria: fundamentos y aplicaciones* (pp. 211-222) Madrid: Visor. Ver igualmente: Guareschi, P. (2001). Compromisso social da psicologia. (pp. 61-98). En A. M. P. Caniato, E. A. Tomanick (comps.). *Compromisso social da psicologia*. Porto Alegre, Brasil: ABRAPSOSUL.

tiene sobre cómo funciona el mundo (físico, social, económico, etc.) y las características que éste posee. Dependiendo de esas creencias la persona intentará o no cambiar situaciones y verá como apropiadas algunas acciones pero no otras. En otras palabras, esos componentes intrapersonales incorporan el sentido de autoeficacia de la persona, es decir, reúnen las creencias sobre la capacidad de transformar lo que de una manera está dado y de localizar, según su experiencia, la autoría agéntica¹⁷. De manera general esta autoeficacia señala la valoración de la persona sobre si tiene el repertorio de acciones para ejercer control sobre lo que tiene entre manos. Esta autoeficacia remite a la historia personal del individuo ya que éste concluye si tiene esa capacidad reflexionando sobre eventos pasados y comparándolos con los que le atañen en ese momento. A esta historia personal también se unen historias grupales y sociales a las cuales está ligado el individuo. Nunca será más meridiana la implicación que lo social tiene en la construcción de la subjetividad. La persona cotejará lo que puede obtener con sus esfuerzos personales y lo que está mejor garantizado por acciones grupales y asociatividades. Es claro que la información necesaria para controlar, responder y navegar en el mundo social proviene de otros y, de manera particular, de los grupos a los que uno pertenece.

Los componentes *interactivos* incluyen toda la gama de transacciones con los distintos mundos con los que se relaciona la persona (social, religioso, físico, cultural, etc.). Uno de estos mundos es el de la sociedad en la que se vive y el ideario que lo sustenta. La interacción con esos mundos está determinada por la valoración que la persona tiene sobre ellos; la crítica a la que los somete de manera expresa o espontánea, transitoria o permanentemente; la ubicación de la persona en ellos y el grado y forma de participación e implicación personal. Como señala una conocida psicóloga social, estos componentes incluyen: "el desarrollo de capacidades para la toma de decisiones y para solucionar problemas, que son necesarias para comprometerse activamente con la

¹⁷ El concepto de auto-eficacia fue introducido por Albert Bandura hace casi 30 años. Ver los siguientes trabajos: Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy. *Current Directions in Psychological Science*, 9, 75-78. Bandura, A. (1997). *Self-efficacy. The exercise of control*. Nueva York: Freeman. Maddux, J. E. (1995). *Self-efficacy, adaptation and adjustment: Theory, research and application*. Nueva York: Plenum.

transformación del entorno en el que se vive”¹⁸ Estas capacidades le permiten a la persona intervenir exitosamente en los sistemas sociales y políticos.

Los componentes *comportamentales* están situados a un nivel mucho más preciso y específico de acciones y conductas. Incluye, por ejemplo, el número y tipo de asociaciones a las que pertenece una persona y cómo éstas reclaman de manera concreta algunos recursos de la que ésta dispone (ej. información, tiempo, habilidades, contactos). Contiene, además, todas aquellas acciones comunitarias en la que la persona participa con la intención de atender una necesidad experimentada en común y, que por lo tanto, desborda las necesidades y recursos meramente individuales. El conjunto de esos componentes comportamentales va dando el sentido de comunidad y de participación ciudadana.

El fortalecimiento de la comunidad, entonces, tiene que ver con la creación de unos espacios sociales donde se posibilite la acción conjunta dirigida a la búsqueda del bienestar compartido ya que el malestar es también compartido. Algunos psicólogos comunitarios y sociales identifican este proceso como uno de empoderamiento, es decir, la transformación del sentimiento de impotencia ante problemas concretos en otro positivo que sitúa a la persona como actor o actora de su propio destino. Todo este proceso, que Freire llamó concientización y desideologización, abre espacios de comunicación y de crítica constructiva que tiene dos efectos inmediatos. En primer lugar, quedan resaltados los lazos solidarios que han sido necesarios para conocer la realidad social y transformarla. En segundo lugar, se posiciona la comunidad como el ente privilegiado de transformación que le llevará a movilizar recursos (ej. sociales, políticos) para animar que otros (gobierno y otras organizaciones cívicas, gremiales, políticas, religiosas) a la solución de un problema que va más allá de la comunidad misma. Esto es posible debido al poder que surge en la confluencia de esfuerzos comunes unidos y solidarios. Parece ser que para contrarrestar los efectos negativos de la presencia de las maras en la comunidad se tiene que pasar necesariamente por el poder organizativo y de acción conjunta de la comunidad. Como queda ya señalado, para esto las comunidades necesitarán el concurso de instituciones del

¹⁸ Ver Montero, M. (2003). *Teoría y práctica de la psicología comunitaria*, pg. 73. Buenos Aires: Paidós.

Estado y de la sociedad civil que deberían coadyuvar en este proceso. Esto no es tan sencillo pues, por razones diversas expresadas de maneras muy sutiles, hay poca confianza en las instituciones del Estado, con la notable excepción de las iglesias. En resumen, se puede afirmar que la inacción y aun el fatalismo que pueden surgir de vivir en situaciones donde se tiene poco control sobre los niveles y formas de violencia, puede dar paso a otro sentimiento social: el del empoderamiento y la capacidad agéntica del esfuerzo común¹⁹.

Quisiera señalar dos ideas que surgen cuando se intenta abordar el problema de la violencia desde las actividades y coordinadas sociales de las mismas comunidades donde existe el problema. Estas ideas tienen que ver con los pasos en el proceso de fortalecimiento de las comunidades a raíz de la presencia de maras en ellas. Su consideración puede ayudar para motivar, orientar y a esbozar estrategias de intervención psicosocial. En primer lugar, y en referencia a los componentes intrapersonales que hemos señalado anteriormente, conviene tener en mente que éstos son procesos, procesos de un desarrollo creciente del sentido ser-en-relación-con-el-mundo, como lo señala Maritza Montero²⁰. Es decir, son procesos a los que es necesario darles el tiempo para que la persona no se sienta como individuo aislado en un mundo “ancho y ajeno” –para utilizar el título del impresionante libro del escritor peruano Ciro Alegría.

En segundo lugar, el proceso de fortalecimiento de la comunidad llevará a acentuar tanto el sentido común como la conciencia crítica de las fuerzas políticas y sociales que actúan al exterior de la comunidad. Estas otras fuerzas, con frecuencia, tienen un entendimiento mucho más limitado de los problemas que tiene que enfrentar la comunidad. Es altamente probable que este proceso haga resaltar las distintas motivaciones de ese mundo social y político más amplio que tiene su propia agenda, pero con el cual la comunidad necesariamente tiene que interactuar y al cual tendrá

¹⁹ Cf. Serrano-García, I. y López Sánchez, G. (1994). Una perspectiva diferente del poder y el cambio social para la psicología social-comunitaria. En *Psicología social comunitaria. Teoría, método y experiencia* (pp. 167-210). Guadalajara: Editorial de la Universidad de Guadalajara.

²⁰ Montero, M. (coord.). (2002). *Psicología social comunitaria. Teoría, método y experiencia*. Buenos Aires: Paidós.

que interpelar y a veces encarar. Así, este proceso de fortalecimiento comunitario conlleva la construcción cada vez más crítica de las fuerzas sociales y políticas que componen nuestro *mundo de vida* —expresión entendida en el sentido fenomenológico que le diera Schutz en 1973. Por mundo de vida queremos dar a entender ese ámbito de la realidad que la persona alerta y normal simplemente supone en la actitud de sentido común, es decir, todo lo que experimentamos como incuestionable y que incluye todo ese mundo socio cultural al cual pertenece. Se trataría de un proceso que se desarrolla en la acción y en la reflexión llevada a cabo junto con otros miembros de la comunidad.

Finalmente, y para concluir, es importante señalar que no se puede desvincular el fenómeno de las maras del tema de la violencia tan arraigada en algunas sociedades como la salvadoreña. Desde hace mucho tiempo, El Salvador, por ejemplo, ha sido una sociedad violenta. El dominio del poder, la fuerza —y ésta bruta—, el privilegio de unos pocos, la impunidad, la violación a los más elementales derechos de los ciudadanos han sido una constante en la historia de El Salvador, y no excluiría a algún otro país centroamericano. De aquí ha nacido una sociedad donde hay dos categorías de personas: unas gozan de los recursos económicos y sociales del país, otras viven de no morir. Unas tienen oportunidades y bienestar, otras tienen penas y sufrimientos. Unas son ciudadanos dignos, con derechos; otras son gente basura. La sociedad acepta sin mayor enfado que muchos tengan poco acceso a una educación de calidad, no encuentren trabajo digno, vivan en condiciones infrahumanas y tengan que ver hacia el Norte para hacer su proyecto de vida. Estos muchos viven al margen de la vida cultural, social, económica del país. Arañan y escarban la tierra —y muchas veces los basureros mismos— para su existencia.

En definitiva, la sociedad expulsa a muchos jóvenes a los límites de la convivencia social, donde impera la violencia, la muerte, la precariedad. Y éstos a su vez depredan socialmente sus propias comunidades. Esta depredación acentúa la ya honda brecha entre estos dos mundos. Uno, que en los últimos años ha acercado a las maras a acciones delictivas (ej. sicariato, extorsiones, secuestros, narcomenudeo, trata de personas) y a vincularse con el crimen organizado. El otro mundo, asediado, construye una ideología y barrera legal tan alta como ineficaz. Este fracaso de sociedad voraz, injusta y cínica crea las condiciones que dan pie

a las maras. La violencia que las maras ejercen es expresión de esa violencia más profunda y estructural. De manera trágica las maras son la expresión del malestar de una sociedad elitista y discriminatoria, excluyente y son consecuencia de decenas de años de inatención oficial y desidia a los problemas que han aquejado a comunidades pobres desde hace ya bastante tiempo. Si bien la experiencia de exclusión social y las carencias de todo tipo que caracteriza la vida de muchos jóvenes está de manera compleja asociada —y no de manera determinista— a la violencia, lo cierto es que la hoja de ruta para muchos de ellos es de la vida poca a la vida loca. Para algunos jóvenes el paso de la vida poca a la vida loca es un paso corto que se toma sin mayor deliberación. Esta ruta es, con frecuencia, tortuosa, a veces fatal, pero siempre peligrosa y rápida. Romper los círculos de la violencia demanda políticas de Estado informadas, consultadas, basadas en la investigación, apegadas a derecho²¹ y que propicien la inclusión de los jóvenes a la vida cultural, educativa, social y económica de cada uno de los países centroamericanos.

²¹ Con fecha 4 de diciembre 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), expresaron públicamente en un comunicado de prensa su preocupación por la situación de los niños, niñas y adolescentes vinculados a las pandillas o maras en El Salvador, Guatemala y Honduras. Expresan su preocupación por (a) la falta de atención de los gobiernos de esos países a la obligación de velar por la seguridad pública dentro del respeto por los derechos humanos, y (b) por el trato inferior de los jóvenes detenidos asociados a maras respecto a otras poblaciones penitenciarias y la ausencia de programas dirigidos a la rehabilitación de los jóvenes infractores.